



Instituto de Acceso  
a la Información Pública



NUE 168-A-2019 (OC)

**Escobar Castillo y otros vs Corte Suprema de Justicia (CSJ)**

**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las ocho horas con treinta y dos minutos veintiuno de enero de dos mil veinte.

***Descripción del caso:***

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Eduardo Salvador Escobar Castillo y Mónica Patricia María Velasco Escamilla**, en adelante los apelantes, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** emitida el quince julio del dos mil diecinueve.

La información solicitada por los apelantes consistió en: "1- Número total de procesos penales terminados por medio de sentencia condenatoria clasificado por delitos; 2- número total de procesos penales terminados por medio de sentencia condenatoria en los que se valoró la declaración de un testigo criteriado, clasificada por delito; 3- número total de procesos penales terminados por medio de sentencia condenatoria en los que se valoró la prueba pericial de intervención de escuchas telefónicas, clasificadas por delito; 4- número total de procesos penales terminados por medio de sentencia absolutoria, clasificado por delito; 5- número total de procesos penales en los cuales se aplicó una terminación anormal del proceso, detallando la misma ya sea como conciliación, mediación, remisión, suspensión condicional del procedimiento, entre otras cosas; especificando delito; 6- número total de procesos penales en las cuales se resolvió por la aplicación de un juicio sumario; especificando delito; 7- número total de procesos penales en las cuales se extinguió la acción penal por la figura de la prescripción; especificando delito; 8- número total de procesos penales resueltos en sobreseimiento definitivos de conformidad a los supuestos del artículo 350 numerales 1, 2 y 3; clasificado por delito; 9- número total de procesos penales resueltos por cesaciones de conformidad al artículo 38 de la Ley Penal Juvenil; clasificados por delito; 10- número total de procesos penales resueltos en sobreseimientos provisionales de conformidad al artículo 352 del Código Procesal Penal; 11- número total de procesos en

Página 1 de 16



cuyas declaraciones patrimoniales de empleados y funcionarios públicos se resolvió por la Corte Suprema de Justicia la existencia de presuntos indicios de Enriquecimiento Ilícito y fueron remitidas a la respectiva Cámara de lo Civil; 12- número total de denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia por ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos en contra de funcionarios o empleados públicos, ya sea por contar con pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o Municipal; 13- número total de denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus facultades en contra de funcionarios o empleados públicos, ya sea por contar con pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a cosa de la Hacienda Pública o Municipal; 14- número total de procesos en los cuales la Cámara de lo Civil correspondiente inició juicio por enriquecimiento ilícito contra empleados o funcionarios públicos; 15- número total de procesos en los cuales la Cámara de lo Civil correspondiente inició juicio por enriquecimiento ilícito contra empleados o funcionarios públicos y que se encuentran pendientes de resolución final; 16- número total de procesos en los cuales la Cámara de lo Civil correspondiente inició juicio por enriquecimiento ilícito contra empleados o funcionarios públicos y se declaró por sentencia condenatoria; 17- número total de procesos en los cuales la Cámara de lo Civil correspondiente inició juicio por enriquecimiento ilícito contra empleados o funcionarios públicos y se declaró sentencia absolutoria; 18- número total de procesos en los cuales se ejerció por parte de la FGR la acción de extinción de dominio contra empleados o funcionarios públicos; 19- número total de procesos en los cuales se ha declarado inadmisibile el requerimiento de extinción de dominio contra empleados o funcionarios públicos y la respectiva razón legal que habilitó dicha inadmisibilidad; 20- número total de procesos de extinción de dominio contra empleados públicos o funcionarios públicos en los cuales se finalizó con sentencia definitiva en la cual se decretó la improcedencia de la extinción de dominio y la razón legal de la misma; 21- número total de procesos de extinción de dominio contra empleados o funcionarios públicos en los cuales se finalizó con sentencia definitiva y se decretó la procedencia de la de extinción sobre sus bienes; 22- número total de apelaciones sobre los procesos de extinción de dominio contra empleados o funcionarios públicos que se encuentran pendientes de resolución; 23- número total de apelaciones sobre los procesos de extinción de dominio contra empleados o

funcionarios públicos, en los cuales se confirmó la sentencia definitiva y se decretó la procedencia de la de extinción sobre sus bienes; 24- número total de procesos penales con reserva clasificados por delito; 25- número total de procesos abreviados terminados en sentencia condenatoria especificando su delito; 26- número total de procesos abreviados terminados en sentencia absolutoria especificando delito; 27- número total de procesos abreviados terminados en sentencia condenatoria donde se valoró un testigo con criterio de oportunidad, especificando delito. Dicha información la solicitan respecto de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Posterior al trámite de la solicitud, en fecha 15 de julio, la oficial de información de la CSJ resolvió lo siguiente: "1) confirmarse la inexistencia en la Dirección de Planificación Institucional; Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador; Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla; Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente; Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador; y Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador; y, 2) ordenar la entrega de los comunicados así como la documentación anexa de los mismos".

La inconformidad de los apelantes se fundamenta en el memorándum con referencia DPI-529/2019, firmado por el director de Planificación Institucional de la Corte Suprema de Justicia donde comunica que no poseen la información en razón de estar conformada por variables de seguimiento procesal no incluida en los diferentes instrumentos de recolección de datos de esa dirección asesora, cuyo soporte es manual, ante la carencia de sistemas informáticos de seguimiento en los tribunales. Esto significó que no se entregó la información de ningún tribunal competente del país respecto de los requerimientos de los numerles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26 y 27.

Continúan expresando que: "puede darse el caso que la información no esté resguardada en los archivos institucionales, pues no fue generada, pero si es posible el acceso a la fuente, no será procedente declarar la inexistencia de la misma porque perfectamente esta se puede generar. Entonces en este caso, el oficial de información debe acudir a la fuente donde se puede producir la información y obtenerla. La fuente desde donde se puede generar la información objeto de la presente apelación se encuentra en los tribunales competentes del país, pues ellos cuentan con los libros de sentencia, conciliación, remisión, prescripciones,



registro de audiencia y la resolución adoptada en las mismas, entrada y salida de expedientes, entre otros. La normativa legal obliga a los tribunales a contar con las herramientas de registro de las cuales se puede extraer la información solicitada.

Los apelantes continúan expresando que en el presente caso se hace evidente que la oficial de acceso a la información del Órgano Judicial, no realizó el respectivo procedimiento ni cualquier otra diligencia para que se generara la información requerida directamente de la fuente donde se podían extraer los datos, pues no requirió a los tribunales competentes la información contenida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26 y 27 de nuestra solicitud, pese a ser estos las dependencias que poseen las herramientas de registro de la información solicitada. Estamos en presencia de inactividad de la oficial de información.

Por último, los ciudadanos establecen que no han concurrido los presupuestos de ley necesarios para declarar como inexistente la información contenida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26 y 27 de la solicitud de información, pues, como se dijo, es un caso de inactividad ya que no se requirió la información a los tribunales competentes pese a que cada uno cuenta con libros de registro donde está la información petitionada. Es decir, la información requerida puede ser generada partiendo del documento fuente de la misma.

El instituto admitió la apelación y designó a la comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández para instruir el procedimiento, y elaborar el proyecto de resolución.

Durante la etapa de instrucción, la CSJ remitió el informe de ley al que se refiere el artículo 88 de la LAIP, de manera extemporánea; por lo que, por medio de auto emitido el once de octubre del año dos mil diecinueve, se tuvo por recibido, más no por rendido. Junto con dicho informe la CSJ ofreció prueba documental, respecto de la cual su admisión se realizaría en la audiencia oral del presente caso.

En la realización de la audiencia oral, se contó con la comparecencia de los apelantes y de la apoderada de la CSJ; en la cual ambas partes ofrecieron prueba documental. Durante la fase de alegatos los apelantes manifestaron que lo fundamental en este caso es definir que es una declaratoria de inexistencia de información, porque una autoridad obligada por la LAIP, tiene que velar porque se cumplan los criterios para declarar una información como inexistente y en esa medida partiendo de lo que ya ha resuelto este Instituto, los apelantes

exponen que al menos se deben dar dos condiciones, que no se encuentren en los archivos institucionales; y que exista imposibilidad de acceder a la unidad o dependencia institucional donde se puedan extraer estos archivos. Por lo tanto, para la parte apelante no se cumple el último requisito, en el sentido que con la prueba ofertada se demuestra que existen los libros de registros en los cuales se encuentran contenidos los ítems que se han solicitado. Aunado a lo anterior, señalan que basándose en el artículo 73 pueden asumir que esta la fuente de donde se puede extraer la información, que son los libros de registro que tienen cada uno de los tribunales del país; por lo que, si aceptan el criterio de que esta la fuente, no es válido declarar la inexistencia de la información, porque está la fuente de la que se puede extraer.

Por su parte, la apoderada de la CSJ aclaró que la unidad de acceso a la información pública ha declarado como inexistente y es que, lo que se ha requerido en la petición de acceso son datos estadísticos, y conforme a las funciones administrativas de la Dirección de Planificación Institucional, esta es la única dependencia administrativa que dentro del Órgano Judicial procesa datos estadísticos a nivel nacional; de manera que, la inexistencia de la información de los trece requerimientos apelados, fueron solicitados directamente al director de planificación institucional, pues este es el único que a nivel nacional procesa esa información, y dicho servidor ha expresado que no se tiene la información en los términos requeridos.

Por otro lado, la apoderada de la CSJ expresa que los tribunales no procesan datos estadísticos, por no estar dentro de sus competencias ni siquiera administrativa, y que, los tribunales tienen competencia de llevar libros administrativos, su competencia legal se limita a tener libros de entrada y que pueden estar a disposición del público; pero no es competencia, ni es la función principal de los tribunales a nivel nacional el procesamiento de datos estadísticos; y no es cierto que de los libros administrativos se pueda sacar toda la información que se ha requerido, puesto que hay información que se ha requerido, que es propia de seguimientos procesales y que correspondería ir a ver el expediente para sacar un dato estadístico que no le corresponde al tribunal.

#### **Análisis del caso:**



El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: I- principio de máxima publicidad; II- valoración de la prueba admitida; III- la información inexistente y sus supuestos; IV- análisis del caso en torno a la inexistencia de la información alegada por el ente obligado.

I- El **principio de máxima divulgación** ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones<sup>2</sup>.

En ese orden, el artículo 4 letras “a” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece el **principio de máxima publicidad**, como principio rector del Derecho de Acceso a la Información Pública y, sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en un sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Corte I.D.H. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros vs Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C nº 219, párr. 230.

<sup>2</sup> Disponible en <http://www.oas.org/cji/CJI>

<sup>3</sup> CIDH- Caso Gomes Lund y otros vs Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C. nº 2219, párrafo 230.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentre en poder de los entes obligados<sup>4</sup>, son que: a) *el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción*<sup>5</sup>; b) *la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada*<sup>6</sup>; y, c) *preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación*<sup>7</sup>.

En relación a las limitaciones al DAIP la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información; se ha establecido que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que “las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”.<sup>8</sup>

II- En el presente apartado, es preciso analizar ciertas acotaciones sobre la **aportación de prueba**. Al respecto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) de aplicación supletoria en estos procedimientos, según lo establecido en el artículo 102 de la LAIP, contempla el derecho a probar; es decir, el derecho que tienen las partes de probar sus afirmaciones, a fin de que estas sean tomadas en cuenta al momento de emitir resolución sobre los hechos controvertidos que sean fundamento de la pretensión.

En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes, la cual a su vez se encuentra sujeta a principios y reglas que deben respetarse en cada acto a efecto de garantizar la legalidad del mismo.

<sup>4</sup> Artículo 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

<sup>5</sup> Relatoria especial para la libertad de expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición, 2012”.

<sup>6</sup> Idem

<sup>7</sup> Idem.

<sup>8</sup> Idem



En este contexto, el CPCM contempla además, dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: **la pertinencia y la utilidad**. En cuanto a **la pertinencia**, el artículo 318 del CPCM establece que no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a **la utilidad**, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo contempla que no deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Por medio de escrito remitido a este Instituto en fecha 09 de agosto del presente año, los apelantes manifestaron que no contaban con otros medios probatorios que no sean los contenidos en el expediente administrativo; sin embargo, durante la realización de la audiencia oral ofrecieron como prueba copia simple de la resolución con referencia UAIP/No 48/2019, emitida por el oficial de información del Consejo Nacional de la Judicatura, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

Por su parte la CSJ ofreció como prueba en el informe de ley, la documentación consiste en: 1- memorándum con referencia Im/165/ S.G./2019 de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; con lo cual se pretende probar que la posición de defensa sobre la inexistencia de variables estadísticas solicitadas y la de los libros administrativos que señala el peticionario ha sido aprobada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno; 2- oficio número 1285 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador; a través del cual se pretende probar que en los libros administrativos que regula el artículo 42 de la LOJ no están contenidas las variables solicitadas por los apelantes en el presente caso; 3- oficio número 1800-2019, de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por el Juez Quinto de Instrucción de San Salvador; con el cual se pretende probar que los libros administrativos que regula el artículo 42 de la LOJ no están contenidas concretamente las variables solicitadas por los apelantes en el presente caso, lo cual se puede determinar con la vista del libro de ingreso de expediente del referido tribunal; 4- oficio número 1289 del 16 de agosto de 2019, suscrito por la Jueza Primero de Menores Suplente; con el que se pretende probar que la variable número 9 del requerimiento de información planteado por los apelantes no se registra en los libros administrativos que llevan los juzgados de menores; 5- oficio número 6788 del 14 de agosto



de 2019, procedente del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, por el cual se pretende probar que de los requerimientos concretos respecto de los cuales tienen competencia los tribunales de sentencia ordinarios, no se llevan los datos requeridos en ningún libro; 6- oficio número 2618 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por la Secretaria del Juzgado Especializados de Sentencia "C" de San Salvador, con el cual se pretende probar que en los libros administrativos que regula el artículo 42 de la LOJ no están contenidas las variables solicitadas por los apelantes en el presente caso; y 7- nota con referencia SA-105-2019, del 16 de agosto de 2019, suscrito por el Licenciado Juan Pablo Barrera Galdámez; con el que se pretende probar cuales son los libros administrativos que la Unidad de Sistemas Administrativos distribuye de forma estandarizada a nivel nacional a los diferentes juzgados, tribunales y cámaras, por materia de competencia e instancia de conocimiento, en virtud del mandato legal del art. 42 de la Ley Orgánica Judicial; y mediante la realización de la audiencia oral correspondiente al presente caso, se ofreció como prueba documental las competencias y facultades de las unidades organizativas del Órgano Judicial.

Respecto a la prueba ofrecida por los apelantes mencionada en los párrafos anteriores, al momento de correrle traslado a la apoderada de la CSJ, expresó que dicha prueba es impertinente, y que la misma ya obra en poder de este Instituto; sin embargo, el Pleno de este Instituto luego del análisis de lo aportado por los apelantes admitió como prueba dicha documentación, por considerarla útil, y que la misma no se encuentra en el expediente administrativo que se lleva en este Instituto.

Por otro lado, los apelantes en relación a la prueba ofrecida por la CSJ manifestaron que la misma no es útil ni pertinente, debido a que el documento ofrecido muestra las atribuciones que tiene cada una de las áreas administrativas del órgano judicial, y en esa medida ellos no están desvirtuando cuales son las atribuciones que tiene cada unidad.

En relación a la prueba ofrecida en el informe de ley por parte del ente obligado, durante el desarrollo de la audiencia oral el Pleno de este Instituto advirtió que la documentación consistente en certificación del libro de entrada de expedientes contenía datos personales, por lo que, se requirió a la apoderada de la CSJ que en un plazo de veinticuatro horas presentara dicha documentación en versión pública para ser agregada al expediente en calidad de prueba; en razón de lo requerido se procedió a extraer los folios correspondientes



del expediente y en dicho acto le fueron entregados a la apoderada en razón de lo requerido. En fecha 29 de octubre, dicha documentación fue remitida según los parámetros expuestos en la audiencia oral.

Posterior a la deliberación realizada por las comisionadas y los comisionados de este Instituto, se admitió la prueba ofrecida con el informe de ley; y en relación a la prueba ofrecida en audiencia oral, la misma fue rechazada como prueba, debido a que lo que se está remitiendo forma parte del acervo normativo que el Instituto utilizará para fundamentar la resolución respectiva; puesto que cualquier clase de normativa, directrices, circulares no constituyen un medio probatorio; por lo que, la misma fue recibida e incorporada al expediente para dar contenido y forma a la resolución, pero no como medio probatorio.

**III-** Para el caso en comento, la CSJ alega que la información solicitada por los apelantes, no puede ser entregada en razón de que la misma es inexistente en los archivos de la Dirección de Planificación Institucional de la Corte Suprema de Justicia.

La **información inexistente** se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla – artículo 73 de la LAIP-. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por las personas que ejerce las funciones de oficial de información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo solicitado; ya que la mera alegación de la no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

Sobre ello, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, que son: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito, y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si se realizó de conformidad por las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Resolución definitiva LAIP39-A-2013, emitida el 28 de octubre de 2013.

En este contexto, corresponde estudiar la primera causal de inexistencia, puesto que sería la más aplicable al caso en razón de las alegaciones por la CSJ, ya que prácticamente, se está argumentando que la información no ha sido generada.

Es atinente señalar, que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentre en los archivos de la autoridad –es decir, se trata de una cuestión de hecho–; no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer la información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada<sup>10</sup>.

Además, en las resoluciones emitidas por este Instituto<sup>11</sup>, se han tomado como base los criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: 1) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; 2) que realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; 3) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); 4) que de la búsqueda efectuada no se localizaron los documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y 5) la precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil en los términos de la ley que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) esta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

Bajo esa lógica, la forma idónea para verificar y comprobar que efectivamente no existe en sus registros la información solicitada, es a través de las diligencias de búsqueda

<sup>10</sup> Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos de México.

<sup>11</sup> Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



que realizó la oficial de información para localizar la información en las unidades o dependencias que pudieran tener en su poder tal información.

IV- Para el presente caso, se ha hecho mención del artículo 42 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ), el cual hace referencia a los libros que cada juzgado debe llevar, mencionándose: a) de inventario; b) de entrada de expedientes y documentos; c) de conocimiento de procesos, según el ramo o ramos que le correspondieren; d) de sacas; y e) de acuerdos y actas. Asimismo, ciertos tribunales llevarán libros de inscripción de practicantes, y un legajo de copias o fotocopias de sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de definitiva, pronunciadas en el respectivo año.

Respecto a dicha disposición se advierte la existencia de libros en los cuales se registra información judicial e información administrativa; sin embargo, la información estadística no es generada por cada tribunal; por lo que, este Instituto ha reconocido que existen diferentes factores materiales que dificultan el goce del DAIP como el determinar a cual información es posible acceder, y cuáles son las posibilidades de imponer a los entes obligados la producción de información que no tengan en su poder o el de generar.

Es decir que los entes obligados en el ejercicio de sus competencias funcionales recopilan y generan datos que pueden ser empleados por ellos mismos o no. En ese sentido, es útil distinguir algunos niveles de acceso a los datos<sup>12</sup>, los cuales son: *1) acceso al dato procesado; 2) acceso al dato bruto; y 3) información ya no sobre los datos, sino sobre el circuito de circulación de los datos dentro de la administración pública*<sup>13</sup>.

1) En el primer nivel, la administración pública provee a un particular la información que ella misma procesó, y que emplea generalmente con fines internos.

2) Respecto al segundo nivel, es decir, al dato registrado por la administración pero aun no procesado; el cual tiene como una buena justificación, la imposibilidad práctica de que la administración procese los datos de modo compatible a lo solicitado por los requirentes, de modo que el acceso al dato bruto permite a los particulares, procesar esos

---

<sup>12</sup> González, F. y Viveros, F. (eds.), Igualdad, Libertad de Expresión e Interés público, Cuadernos de Análisis Jurídico N°10, Serie de Publicaciones Especiales, Universidad Diego Portales, Santiago, 2000, pp. 197-203.

<sup>13</sup> Resolución definitiva IAIPI 125-A-2014, emitida el 29 de octubre de 2014.

datos, descargando al Estado de esta tarea. De modo que se reemplaza de esta manera la exigencia de producción o procesamiento de información no obligatoria por parte del Estado.

3) En relación con el tercer nivel, tiene especial relevancia, en la medida que, aunque los datos requeridos están en el poder de la administración, resulta a veces difícil para los particulares ejercer su derecho por la ignorancia de la repartición a la cual es necesario requerir los datos solicitados.

En relación con lo anterior, el presente caso se encuadra en el segundo nivel de acceso a la información solicitada, ya que durante el desarrollo del presente procedimiento se ha acreditado por ambas partes la existencia de la información a partir de la cual se puede extraer los datos estadísticos solicitados, más no el dato procesado, que es el que constituye el objeto de controversia del presente recurso de apelación.

Lo anterior se advierte con base a las gestiones realizadas por la oficial de información al realizar los requerimientos respectivos a las unidades administrativas en las cuales pudiera obrar la documentación, correspondiéndole a dicha unidad administrativa requerida hacer del conocimiento de la oficial de información el estado y clasificación de la información dentro del ente obligado, así como también, en su caso, de los motivos de su inexistencia junto con las gestiones de búsqueda dentro del ente obligado sobre la misma<sup>14</sup>.

Respecto a lo anterior, los comisionados y comisionadas por medio de la documentación anexada por parte de la CSJ, advierten las respuestas emitidas a los requerimientos realizados, en las cuales se establece que no se cuenta con los libros que contengan la información en la forma requerida; por lo que para poder proporcionar esos datos, deben verificarse cada uno de los expedientes que se tramitan (f. 54), la no existencia de libro habilitado en el que se registra las variables mencionadas (f. 60), la no existencia de un libro administrativo en el cual se registren expresamente y de manera específica las variables solicitadas (f. 68).

En consecuencia de lo anterior, la declaratoria de inexistencia de la información por parte del ente obligado radica en los datos estadísticos con las variables específicas solicitadas; más no así, en la existencia de la información que sirve para obtener dichas

<sup>14</sup> Art. 12 del lineamiento para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública.



estadísticas; haciendo énfasis en la dificultad técnica de extraerla; pues, los datos tendrían que ser recopilados manualmente, es decir, en cada tribunal correspondiente a la materia de la información solicitada; de modo que, el ente obligado tendría que destinar personal específicamente para esta finalidad y aun así el tiempo de entrega de la información sería prolongado.

Esta dificultad técnica, no implica una justificación valedera para la denegatoria de la información; sin embargo, exigir a la CSJ que procese los datos desde cada uno de los Tribunales competentes, en razón del tiempo e inversión de recursos que esto implica, es irrazonable y, en todo caso, volvería nugatorio el DAIP de los apelantes, pues no sería posible cumplir con los principios de sencillez y prontitud, y no podría contar con la información requerida de manera oportuna, sobre todo porque el ente obligado ha expresado que la especificidad de la información que se ha requerido, no se registra en los libros y no tiene la obligación de registrarse; porque de todas las variables que se han requerido hay una parte, pero en los términos concretos en los que ha sido requerida, no se tiene esa información en los libros. Asimismo, agrega que lo que se ha solicitado son datos estadísticos, no se ha pedido información de libros, información de expedientes, de seguimiento de expedientes; se han requerido datos estadísticos, y en los términos que ha sido planteado el requerimiento, que fue solicitado a la unidad que con base a sus competencias administrativas le corresponde proporcionarlos.

En consecuencia, con base a los principios de razonabilidad y prontitud<sup>15</sup>, es factible que la CSJ entregue a los apelantes la información primaria a partir de la cual los interesados puedan obtener los datos estadísticos; es decir, la base de datos de todas las resoluciones emitidas por los tribunales de la materia, que sean pertinentes para satisfacer el requerimiento del apelante, sin que esto implique cargar a la administración de la tarea de procesar los datos, en la forma solicitada por los apelantes.

Lo anterior, no vulnera el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadanos, debido a que los datos procesados que requieren, los tendrá oportunamente captando los datos primarios para poder procesar los datos estadísticos.

---

<sup>15</sup> Art. 4 letra "c" de la LAIP.

Por tanto, es procedente modificar la resolución de la oficial de información de la CSJ.

***Decisión del caso:***

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base en los artículos 6 y 18 de la Cn. 19, 21, 52 inciso 3°, 58 letra “d”, 82, 94, 96 y 102 de la LAIP; 77, 79 y 80 del RELAIP, y 322, 217 del CPCM, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **resuelve**:

- a) **Modificar** la resolución emitida por la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**.
- b) **Ordénese** a la CSJ que, a través de su oficial de información, en un plazo de **quince días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, entregue a **Eduardo Salvador Escobar Castillo y Mónica Patricia María Velasco Escamilla**, la base de datos primaria (en versión pública) correspondiente a la información de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a partir de la cual los apelantes podrán satisfacer su derecho de acceso a la información pública, para el procesamiento de los datos en la forma que lo soliciten.
- c) **Requerir** al titular de la CSJ que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la entrega de la información, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**
- d) **Hacer** saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.
- e) **Remitir** este expediente a la unidad de cumplimiento de este Instituto para que verifique la ejecución de la presente resolución.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN.**

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este  
Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a veintinueve días del  
mes de enero de dos mil veinte.

*[Handwritten signature]*

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

